Índice

Prólogo de Leandro Prados de la Escosura	9
Advertencia del autor	13
1. Valores liberales y un nuevo populismo latinoamericano	15
2. Conjeturas: ¿qué pasaría si	29
3. Conflictos	57
4. Clichés	95
5. Empresa y política	125
6. Otro problema de Adam Smith: el liberalismo	
7. Economía y libertad en el <i>Quijote</i>	
8. Economía y libertad en Shakespeare	
9. Banca y crisis financieras en la literatura popular:	177
Una fortuna peligrosa, de Ken Follett	229
10. Piketty malinterpreta a Austen e ignora a Smith	249
Apéndice. Piezas breves	271
Camino de servidumbre	273
Mercado Libre v <i>Mercado Libre</i>	279

Liberalismo cristiano	285
La gran burbuja	289
El Método Podemos	293
Las tribus liberales	299
La renta básica y lo básico	303
Impuestos para todos los públicos	307
El engaño populista	313
Notas	319
Bibliografía	337
Índice onomástico	355
Índice temático	361

Prólogo

Carlos Rodríguez Braun es una persona multifacética. La mayoría lo conoce por su actividad radiofónica (algunos, ya mayores, recordamos también la televisiva), su activa presencia en las denominadas redes sociales (es uno de los economistas con mayor presencia en Twitter, y no solo de España), por sus artículos en la prensa general y económica y por sus conferencias públicas. Pero es, además, uno de los más distinguidos investigadores en el campo de la historia del pensamiento económico. El nexo de sus intervenciones en medios tan diversos y destinadas a públicos tan diferentes es su defensa, siempre con claridad y elegancia, de las ideas liberales.

En esta segunda entrega de sus *Ensayos liberales*, Rodríguez Braun recurre, de nuevo, a una atractiva combinación de artículos académicos y trabajos periodísticos para llevar a cabo una nítida vindicación de la libertad. Libertad definida como ausencia de interferencia o coacción en las decisiones de los individuos, esto es, libertad negativa, en la acepción expuesta por Sir Isaiah Berlin, o la libertad de los modernos, que define Benjamín Constant, en oposición a la libertad de los antiguos, que enfatiza la libertad colectiva de participar en el proceso de decisión política.

El hilo conductor del libro es la lucha que, a lo largo del último medio milenio, libran los individuos en defensa de su libertad para elegir y actuar sin coacciones; primero, en un ámbito donde la libertad individual se abre paso con dificultad y en perenne conflicto con las fuerzas e instituciones mercantilistas; luego, durante el último siglo, en un contexto en el que el Estado ocupa de forma democrática y creciente parcelas que pertenecen al ámbito de decisión de los individuos, siempre en aras de la protección y de la seguridad, con la consecuencia de un recorte de la libertad individual.

En sus Ensayos, Rodríguez Braun muestra cómo la libertad ocupa un lugar central en la evolución intelectual de Occidente. Así, aborda la libertad durante un tiempo en que el individualismo y la movilidad social avanzaban en un mundo absolutista, y recorre para ello las obras de Cervantes y Shakespeare en el convulso y crítico siglo XVII; examina la actitud ante la libertad en los albores de la Revolución industrial a partir de la contribución de Adam Smith, estudiando las visiones que parecen contradictorias de La teoría de los sentimientos morales y La riqueza de las naciones, para luego reconciliarlas, y analiza la actitud ante el progreso y la desigualdad, y de manera inevitable, la libertad, en la obra de Jane Austen, corrigiendo la interpretación recientemente expuesta por Thomas Piketty en El capital en el siglo XXI. Además, lleva a cabo una nueva lectura de las predicciones de Friedrich Hayek en Camino de servidumbre desde la perspectiva del actual Estado de bienestar; y, por último, realiza una certera evaluación del populismo latinoamericano, hoy en franca expansión al resto del mundo occidental, desde la óptica liberal.

La perspectiva histórica de la libertad en las ideas y los hechos la complementa Rodríguez Braun con la consideración de los obstáculos que enfrenta la libertad en la sociedad occidental desde mediados del siglo XX, en la que la compensación entre libertad y seguridad habría ido desequilibrándose a favor de esta última en un proceso en el que un Estado cada vez mayor llevaría a cabo recortes de la libertad individual bajo la aprobación democrática de los ciudadanos. Así, con estilo ágil e incisivo, Carlos Rodríguez Braun plantea al lector provocadoras hipótesis alternativas a la realidad (los denominados contrafactuales o contrafácticos), propone inquietantes dilemas y destruye manidos tópicos, con especial énfasis en aquellos que afectan a la empresa y a sus relaciones con el Estado.

La visión expuesta de forma brillante por Rodríguez Braun entronca con una venerable tradición que, en la segunda mitad del siglo XX,

incluye a Milton Friedman y a James Buchanan, y en la que predominan dos ideas de hondo calado pesimista. Una, que liberalismo y democracia tienen objetivos diferentes. En el caso del liberalismo, la limitación del poder es la principal preocupación, mientras en la democracia lo es quién ejerce el poder. Así, la confrontación entre los objetivos del liberalismo y la democracia resulta posible, cuando no inevitable. Si en la democracia la decisión de la mayoría determina la asignación de los recursos, ello puede resultar en recortes de la libertad individual en tanto Gobiernos democráticos adopten políticas que restrinjan la competencia y redistribuyan la renta. La segunda idea, anticipada por Mancur Olson y Milton Friedman, sería que la libertad política o democracia, una vez asentada, propende a destruir la libertad económica.

El lector tiene, pues, en sus manos una obra compleja y fascinante y, por ello, no debo hacerle demorar más el inicio de su lectura.





Advertencia del autor

En la década que ha transcurrido desde la primera serie de *Diez ensayos liberales* se mantienen, como era de esperar, algunas líneas de trabajo: los temas clásicos del liberalismo y el antiliberalismo, y la historia del pensamiento económico y sus debates, que en este volumen abordo, en especial en el ensayo que cuestiona las interpretaciones antiliberales de Adam Smith, reflorecidas en tiempos recientes.

Pero hay, asimismo, temas nuevos, o temas antiguos que la crisis ha sacado otra vez a la luz, y que se ven reflejados en estos ensayos. Es el caso, por ejemplo, del populismo y la desigualdad. Noto, por fin, y con satisfacción, un énfasis creciente en procurar extender hacia el mundo de la cultura el análisis de las interrelaciones entre economía, política y libertad.

Agradezco al profesor Leandro Prados de la Escosura por su generoso prólogo y, como siempre, a todo el equipo de LID Editorial por su apoyo, simpatía y profesionalidad.



1

Valores liberales y un nuevo populismo latinoamericano¹

Igual que la pornografía, el populismo es difícil de definir, pero lo reconocemos cuando lo vemos. Y lo que hemos visto en América Latina son populismos inestables que sufren una deslegitimación cada vez más clara. Sospecho que el populismo latinoamericano va a registrar una nueva transformación en busca de una mayor estabilidad, y no la buscará en las variantes más antiliberales del chavismo, y menos aún en el polvoriento castrismo. Podría alcanzarla con una aproximación al liberalismo, lo que sería un fenómeno inédito, pero temo que es más probable que la política latinoamericana no abrace la causa de la libertad, sino la del Estado de bienestar.

El populismo ha demostrado que genera expectativas que no puede cumplir, y su fracaso además es visible en períodos más breves (Cammack 2000, 152), lo que resulta letal: en efecto, si algo parecido a una teoría del populismo pudiera elaborarse, subrayaría precisamente esta relación con el tiempo al debatirse entre la demagogia de sus líderes y lo que Guy Hermet llama «la impaciencia irreflexiva de sus clientes» (Hermet 2003, 11). Esta peligrosa preferencia temporal –peligrosa para el poder político y destructiva para la economíatambién tiene lugar cuando el intervencionismo adopta un carácter institucional, tal como sucede en los países desarrollados, pero con una diferencia: el populismo está asociado a personas, incluso adopta su nombre, con lo cual enlaza su destino a los avatares de esas personas, habitualmente más convulsos que los que registran los sistemas políticos que permanecen a grandes rasgos inalterados aunque cambien los dirigentes de las Administraciones Públicas.

El carácter autodestructivo del populismo es tan innegable que los intentos políticos de intervenir en los mercados a la antigua usanza de los Gobiernos populistas (nacionalizaciones, controles de precios) son desacreditados ante la opinión pública. Existe un aprendizaje que da como resultado que los latinoamericanos valoren un país como Chile más que uno como Venezuela y respeten más a los mandatarios de Santiago, Bogotá, Brasilia² o México que a los de Caracas, La Paz, Managua o Quito (Dornbusch y Edwards 1991, 12; Isern Munné 2004; Walker 2006, 44). Y han demostrado que aprecian a España, emigrando en grandes números: el que la presión fiscal en términos de gasto público total derivada del Estado de bienestar se sitúe en torno al 50 % del PIB y no haya bajado del 40 % en los años del *neoliberal* Aznar no es objeto de recelo o crítica. Si este aprecio va a cambiar en el futuro, ello se deberá no solo a los mayores impuestos, sino a la combinación entre ellos y las dudas sobre la sostenibilidad del sistema.

El ficticio neoliberalismo, entendido como un programa que recorta de manera apreciable el peso del Estado y abre las puertas a empresas privadas en una economía de mercado, también afectó a América Latina, donde varios Gobiernos en los años noventa fueron caracterizados por haberse plegado a una suerte de populismo liberal. Exploraremos en primer lugar ese populismo liberal, que fue más populista que liberal, y no pudo eludir las contradicciones del populismo clásico. A continuación compararemos las políticas intervencionistas del populismo y las de las naciones democráticas desarrolladas, que no son tan distintas como la opinión pública y la discusión académica suelen considerar. Ambos equívocos nos permitirán concluir con una perspectiva de la transformación del populismo en América Latina en busca de una mayor estabilidad económica y política y de las posibilidades que tiene el liberalismo de contrarrestar el nuevo mensaje populista democrático y antiliberal.

Populismo y liberalismo

Las diversas acepciones del populismo fueron estatistas (Almonte y Crespo Alcázar 2009, 26; Aguinis 2005, 18); el populismo es desde

larga data intervencionista, nacionalista, proteccionista, autárquico, xenófobo, paranoico-conspirativo, contrario a la globalización y hostil a los países ricos como Gran Bretaña en el siglo XIX, Estados Unidos en el XX, y en los últimos tiempos exhibe antiespañolismo.

Sin embargo, en los años noventa diversos gobernantes latinoamericanos, en particular Carlos Menem en Argentina, adoptaron políticas que se oponían a la tradición populista, como la privatización de empresas públicas y la apertura comercial tanto interior como exterior. Estos gobernantes fueron asociados al liberalismo, y algunos liberales de forma equivocada los respaldaron (Gallo 1992; Rodríguez Braun 1997).

El llamado neoliberalismo fue un sistema oportunista que nunca respetó el fundamento liberal: la limitación del poder (Novaro 1996, 100). Aportaré una anécdota personal. Un grupo de analistas conversamos con Menem en Barcelona en marzo de 1994. Le formulé dos preguntas. En primer lugar, ¿por qué adoptó unas políticas económicas liberalizadoras sin haber dado antes ningún indicio de que su gestión podría marchar en esa dirección? Me respondió con una sonrisa: «porque si anuncio que lo voy a hacer, no me vota nadie». Esto, al revés de lo que parece, tiene poca gracia, porque hace depender la libertad del capricho del poderoso. Hablando de libertad y poder, la segunda pregunta fue esta: ¿qué piensa usted de los límites del poder político como garantía de la libertad ciudadana? De forma reveladora, no contestó porque, según me dijo, no entendía la pregunta.

En efecto, las políticas privatizadoras y aperturistas no bastan para definir un Gobierno como liberal, porque pueden ser neutralizadas por otras de sentido contrario, y porque el liberalismo no descansa solo sobre la economía, sino sobre instituciones, una cultura política y un fondo moral común (Gallo 1992, 124-5). Las medidas liberalizadoras, entonces, pueden coincidir con expansiones de la coacción pública en términos de impuestos, gastos y deuda, como sucedió con Menem y también con Felipe González en España, otro mandatario acusado de neoliberal y bajo cuya gestión el peso de las Administraciones Públicas alcanzó el récord del 50% del PIB³. Hoy mismo en España se acusa de neoliberal a un Rodríguez Zapatero que ha extendido la coacción fiscal y ha recortado libertades en varios ámbitos

Además, el pseudo-liberalismo neoliberal reprodujo algo del populismo tradicional: el cambio de las Constituciones para que los líderes providenciales puedan continuar ocupando la jefatura del Estado. Esto ya lo hizo Juan D. Perón en 1949, y los populistas latinoamericanos compartieron con posterioridad la norma casi sin excepción. Lo han hecho Hugo Chávez y Evo Morales, pero también Menem, Fujimori e incluso Uribe, nunca incluido en este grupo, y por buenas razones. Carlos Malamud (2010, capítulo III) —que condensa con acierto la concepción populista del poder así: «el poder es para siempre, ni se comparte ni se reparte»—recuerda el ejemplo de Daniel Ortega en Nicaragua, ilustrativo por lo despótico y ridículo: manipuló la Corte Suprema de Justicia para que declarara que el artículo de la Constitución que prohibía la reelección sucesiva atentaba contra los derechos humanos de los candidatos.

El populismo tiende a ser contrario a los valores liberales, y en su forma clásica floreció bajo el intervencionismo que se extendió desde los años 1930, personificado en el pensamiento económico por Keynes, pero que estaba en el ambiente en todo el mundo, como lo prueba el auge del fascismo y otras variantes del socialismo (Rabello de Castro y Ronci 1991, 158; Sturzenegger 1991, 83-6). Ahora bien, el populismo no responde a un modelo único, y su intervencionismo puede albergar componentes de liberalización más o menos intensos por razones de oportunismo que el populismo puede explotar precisamente en ausencia de la cultura y las tradiciones liberales compartidas a las que hemos aludido (Bazdresch y Levy 1991, 228). Su discurso tiene puntos en común con el fascismo y también con el socialismo, aunque ningún populismo fue socialista en el sentido de propugnar la completa socialización de los medios de producción. Al contrario, lo habitual es que se presente como un sistema que integra al empresariado, aunque con adjetivos que lo califiquen de forma positiva como «nacional», y le hace desempeñar importantes papeles políticos, empezando por el corporativismo de los pactos o diálogos «sociales» tripartitos, con el Gobierno y los sindicatos. Dada la política del llamado desarrollo hacia adentro, el empresariado bienvenido por el populismo ha sido por regla general proteccionista, ineficiente y oneroso. Pero las empresas no han sido hostigadas de modo global por la política populista.

El intervencionismo populista ha tenido una doble dimensión, tanto micro como macroeconómica, desde el control –en ocasiones minucioso hasta el disparate—de precios y salarios o la nacionalización de empresas suministradoras de servicios públicos hasta la manipulación del crédito, el establecimiento de un amplio abanico de aranceles, llegando incluso hasta la autarquía comercial, la sobrevaluación del tipo de cambio y políticas monetarias y fiscales que impulsaban la inflación y el déficit público (Cardoso y Helwege 1991, 46-7). A pesar de las apariencias, empero, el Estado populista no ha sido muy grande en comparación con otros, como tampoco lo ha sido su presión fiscal, caracterizada por su selectividad redistributiva, dado que tendía a financiarse castigando sobre todo a algunos grupos, discriminados desde el punto de vista político y también económico, como los agricultores o los importadores. Esto lo ha tornado dependiente de las exportaciones, una variable que las políticas populistas han tendido a perjudicar.

Con ciclos abruptos de crecimiento y crisis, las políticas populistas conducen a callejones sin salida, donde las medidas destinadas a satisfacer de manera real los intereses de los empresarios no competitivos, y al parecer también los de los trabajadores, tropiezan con al menos tres cuellos de botella: la balanza de pagos, la Hacienda Pública y la estabilidad de precios. Si la solvencia del razonamiento populista es endeble, su credibilidad resulta dañada por la comprobación de que sus políticas son insostenibles, y sus beneficios a corto plazo resultan menores que los costes impuestos por la corrección de los desequilibrios que generan (Bazdreschy Levy 1991, 254-5).

A medida que la reiteración de estos fracasos erosiona su capital político, es comprensible que se abra camino la hipótesis del fin del populismo. Después de todo, es razonable pronosticar que el instinto de supervivencia de los gobernantes les hará apartarse de estrategias desprestigiadas. Cabe, sin embargo, anotar otra hipótesis, inquietante para los valores liberales: el populismo puede no extinguirse y transformarse en una agenda política sostenible, que modifique su intervencionismo no solo sin atenuarlo sino profundizándolo, y que al mismo tiempo atenúe los problemas de inestabilidad y agotamiento que ha padecido hasta hoy.

Populismo y democracia

Las relaciones entre populismo y democracia suelen ser calificadas de antitéticas (Torre 2001, 178; Aguinis 2005, 17; Krauze 2005; Rabello

de Castro y Ronci 1991, 157). El populismo tiene contradicciones con la democracia al subrayar el papel de líderes carismáticos que no necesitan intermediarios institucionales entre ellos y los ciudadanos, porque se supone que emanan del pueblo, al que protegen frente a perversas oligarquías nacionales y extranjeras.

«El populismo toma literalmente lo de "gobierno del pueblo por el pueblo" y rechaza todos los frenos y contrapesos ante la voluntad popular. Otros elementos constitutivos de la democracia –el imperio de la ley, la división de poderes o el respeto a los derechos de las minorías— son impugnados porque constriñen la soberanía del pueblo (Jagers y Walgrave 2007, 337-338)».

Esto, sin embargo, no debería conducir a la conclusión de que todo el contenido del populismo es incompatible con la democracia tal como la conocemos en los países desarrollados o que esta no guarda relación alguna con el populismo. Una cosa es que el populismo se vea arrinconado en un sistema político estable con una sociedad civil más o menos articulada (Rabello de Castro y Ronci 1991, 151; Bazdresch y Levy 1991, 256), y otra cosa es que en ese contexto resulte ausente del todo.

Recordemos la indefinición del populismo: «carece de color político [...] y puede ser de derechas o izquierdas. Es un estilo político habitual, adoptado por toda suerte de dirigentes en todos los tiempos. Es simplemente una estrategia para recoger apoyos» (Jagers y Walgrave 2007, 323). El populismo puede cambiar, como se vio con Alan García en el Perú o con Menem, un peronista que apoyó la globalización y la apertura económica contra el antiguo nacionalismo de su partido, aunque, como hemos dicho, expandió el papel del Estado, además de debilitar la división de poderes y extender la corrupción gracias a una justicia adicta, y emprendió peligrosas alquimias monetarias, características antiliberales todas ellas, a lo que cabe añadir el mantenimiento de las redes clientelares, como la estructura sindical. La falta de homogeneidad y el oportunismo, señales del populismo, son abrumadores en este caso, y de ahí que se haya hablado de neopopulismo para referirse a Alberto Fujimori en Perú o a un Menem que privatizó las empresas públicas que había nacionalizado su propio partido en tiempos de Perón a partir de 1946. Carlos de la Torre sugiere que el populismo no es un fenómeno transitorio, y tampoco está ligado a una fase económica, la de sustitución de importaciones (y el proteccionismo que conlleva), ni resulta en exclusiva de una crisis, sino que cabe asociarlo con el intervencionismo redistributivo (Torre 2001, 172, 185, 189); y eso en concreto marca las políticas de las democracias más estables. El populismo, como hemos indicado, tiene un componente personal, pero allí radica una de sus deficiencias a la hora de tropezar consigo mismo merced a la inestabilidad económica y política y al descontento ciudadano. Los resultados de la política populista son más atribuibles a una persona que en una democracia estable. Si los líderes populistas lo aprovechan cuando las cosas van bien, lo sufren más cuando van mal. En cambio, en los países desarrollados los Gobiernos cambian, pero ninguno se ha opuesto de forma seria al Estado de bienestar.

La exhibición que realizan de su cercanía con el pueblo no es una peculiaridad de los populistas latinoamericanos (Jagers y Walgrave 2007, 322). Las facetas populistas de la política española, por ejemplo, han sido señaladas por Recarte (2010, 279-283). Las muestras están en todas las formaciones políticas, incluida la derecha, que en España y Europa se autodenomina «popular». En España, los socialistas insisten en su proximidad con «los humildes», y Rodríguez Zapatero definió el PSOE como «el partido que más se parece a España». Cambiando el énfasis del partido por el de la persona, típica del populismo, el mensaje se equipara al del eslogan de Fujimori: «un presidente como tú» (Torre 2001, 182).

Apuntemos una vez más que el populismo postula el acuerdo con empresarios: los conflictos absolutos con ellos en América Latina, al estilo de Salvador Allende, son raros (Bazdresch y Levy 1991, 224). Perón habló de la «tercera posición» mucho antes que Anthony Giddens, y en líneas parecidas se expresaron Harold Macmillan y muchos políticos en los años treinta, incluidos los fascistas (Álvaro Vargas Llosa 2005, 12). Es cierto que en las últimas décadas esos acuerdos repetidos con los empresarios han tendido a ser, sobre todo en los países desarrollados, diferentes de los proteccionistas de manera abierta del populismo, pero el argumento político general de la necesidad de los llamados pactos sociales es similar, y con toda probabilidad más efectivo a la hora de legitimar el poder en regímenes no populistas. En todo caso, el populismo está preparado para este tipo de estrategias de concertación democrática que ha llevado a la práctica en contextos dispares; por volver al caso argentino, el peronismo anudó alianzas interclasistas con burguesías

industriales proteccionistas, pero supo modificar las coaliciones con la política más aperturista de Menem y volverlas a modificar después con Duhalde y los Kirchner (Torre 2001, 174,177).

La izquierda puede apoyar al populismo, como con Chávez y Morales, y antes con Cámpora y Perón, pero en los últimos años -aunque sin romper lazos con el chavismo y sus ramales latinoamericanos- ha manifestado una creciente predilección por los modelos redistributivos más estables, como los de Chile o Brasil. Un ejemplo es Paramio, quien no condena el populismo «en la medida en que introduce medidas sociales y económicas favorables a las mayorías», pero la alternativa de la izquierda ante el populismo debe resolver su contradicción fundamental: «puede derivar fácilmente en políticas económicas poco o nada responsables, ya que su prioridad es la redistribución clientelar en lugar de la inversión y la transformación de la sociedad» (2006, 72). Reconoce la dificultad debida a que el populismo tiene en América Latina un tirón electoral en general mayor que la izquierda, y por eso no es casual que la izquierda tenga peso ahora donde ya lo tenía antes (Chile, Brasil, Uruguay), y acierta al señalar la clave redistributiva en un marco de estabilidad política y crecimiento económico. Esta clave, asimismo, no excluye a la derecha, como se ve en las democracias avanzadas y en América Latina con Sebastián Piñera. Lo que sí excluye es la promoción de los valores liberales.

Con la redistribución institucionalizada como eje, el populismo puede transformarse y superar sus deficiencias en un marco democrático, donde la demagogia quede atrás o con más probabilidad resulte integrada como parte tolerada, cuando no aplaudida, de un sistema político, como se ha dicho de Colombia, un país donde hay clientelismo sin populismo (Urrutia 1991, 374; Rabello de Castro y Ronci 1991, 151). México también ha sido considerado como protegido contra el populismo por su entramado institucional (Aguilar Rivera 2006, 41). Guy Hermet dice que ningún político respetable se declarará populista «cuando todos recurren a una dosis de populismo para ser elegidos» (2003, 6,14). Los demás ingredientes del populismo también podrán sobrevivir, incluidos la personalización del Gobierno, la demonización de la oposición, la hipertrofia del poder ejecutivo, el debilitamiento de los frenos y contrapesos, y la urgencia de presentar resultados plausibles y visibles. Parafraseando a Constant, podríamos pensar en el populismo

de los antiguos y los modernos, o también en la izquierda carnívora y vegetariana, siendo en apariencia preferibles las segundas alternativas (Mendoza, 2008).

Pero hay que subrayar que no estamos hablando del paso del intervencionismo a la libertad, sino de un intervencionismo a otro más estable. En el plano político, la reivindicación de los premios y castigos cambiaría: ya no se trataría de trabajadores excluidos contra minorías oligárquicas o de empresas nacionales/pequeñas contra extranjeras/grandes. En una democracia desarrollada hay grandes grupos identificables excluidos de forma masiva, pero son los incapaces de organizarse y resistir la opresión, como los contribuyentes, los consumidores, los fumadores, etc. Esto explica en sentido inverso por qué los socialistas en Europa exhortan al gasto público en la ayuda exterior, porque la opinión pública puede distinguir a millones de pobres en otras latitudes y aceptar la tributación en teoría en su nombre. La política encuentra nuevos sujetos de su acción (homosexuales, mujeres, medio ambiente) y puede imponer su intervencionismo con una retórica de estilo populista, la «ampliación de derechos», mientras que disuelve el coste de su acción entre una clase media contribuyente cada vez más amplia y menos resistente.

En el plano económico, estaríamos ante Gobiernos ahora sí preocupados por el déficit público y la inflación, que emprenden políticas que no interfieren con el mecanismo de precios y la asignación de recursos en el mercado, frente al populismo clásico (Bazdresch y Levy 1991, 228). Podemos pasar del viejo populismo contrario a la globalización a un populismo difuminado en el Estado de bienestar, con libertad de comercio pero una elevada fiscalidad en apariencia demandada por unos ciudadanos que, como en Europa, pueden acabar teniendo una redistribución que ya no se hace ocasional y arbitrariamente a través de los salarios o de la manipulación política de los precios relativos, incluido el tipo de cambio, sino a través del gasto público, y cuyo desenlace, que desconcierta a políticos y medios de comunicación, son sociedades con impuestos altos pero salarios relativamente bajos, como sucede con millones de los llamados mileuristas.

No pienso que la transición sea sencilla. Al contrario, resultará difícil porque los países latinoamericanos padecen carencias institucionales que impiden el funcionamiento de un Estado normal, y más aún de un Estado

de bienestar. Este último no es solo gasto, redistribución e impuestos: es un nuevo modelo de Estado que se basa en una tradición intervencionista y una cultura política que cambia la visión liberal sobre conceptos esenciales como derecho, justicia o ciudadanía. Es algo que no se trasplanta con facilidad entre continentes. Ahora bien, cabe sugerir que el caso de América Latina es propicio para la transición por tres razones: la economía, la política y los valores.

Los países desarrollados no son ricos porque tengan Estados grandes, sino que tienen Estados grandes porque son ricos. América Latina registra un largo período de crecimiento que ha podido sortear comparativamente la crisis económica. En la política también sobresale una circunstancia inédita: la generalización de la democracia, lo que distingue a la región frente a otros países emergentes con gran dinamismo económico. Y quizá lo más importante es que en la cultura política latinoamericana se extienden nuevos valores y consensos que la aproximan a la del Primer Mundo. Los ciudadanos cuestionan cada vez menos la economía de mercado y cada vez más las medidas que remiten al viejo populismo, como el proteccionismo, los déficits públicos o la inflación. Cabe destacar la aceptación de la democracia y las demandas de intervención pública tanto en su dimensión redistributiva como en el aspecto ancestral de la seguridad, tal como se ha visto en tiempos recientes en ciudades de México y Brasil. Se considera problemático que en la región se paguen pocos impuestos, queja que suele asociarse a pobreza y desigualdad, y nunca a una presión fiscal elevada –cuando a veces se reconoce este hecho, de inmediato se añade que la presión tributaria es alta para los infortunados que pagan, y se fantasea con que podría ser menor si lo fuera también la evasión y la economía sumergida—. Es corriente asimismo la idea de que en América Latina «no hay Estado», supuesta realidad que jamás es celebrada.

El potencialmente nuevo escenario estable intervencionista y redistributivo sería sostenible superadas las trabas que la arbitrariedad populista erige contra el desarrollo económico. Esta idea reformista prevalece en ámbitos latinoamericanos. Así como hace medio siglo respetables académicos o miembros de la Alianza para el Progreso pedían la reforma agraria, ahora otros de igual manera ponderados y reformistas proponen programas redistributivos (Cardoso y Helwege 1991, 47, 59, 65; Ocampo 1991, 363-4). La solución pasaría no por el liberalismo, sino por una

combinación de apertura de mercados y gasto social, otra vez una tercera vía, «un mejor equilibrio entre mercado y Estado» (Barnechea 2005, 19).

Un liberal tan reconocido como Arnold Harberger llegó a apuntar: «Gobiernos de centroizquierda han aplicado políticas económicas bastante buenas en los últimos años: Felipe González en España, Mitterrand en Francia» (1991, 365). Pero las gestiones de estos mandatarios fueron deficientes y fueron criticadas en su momento por muchos liberales. Los Gobiernos de González en España dieron lugar a unas elevadas tasas de paro y a un gasto público desbocado. Cuando Harberger los elogia, parece que los valores liberales enfrentan dificultades, porque las políticas que aplaude tuvieron apreciables capítulos antiliberales. No fueron, en cambio –suspiremos aliviados–, populistas.

Gerardo Bongiovanni dice que el populismo no es teóricamente definible porque es un truco, un *modus operandi* que vale para todo apelando al pueblo (2007, 19-21). Pero por eso no es descartable que supere sus ineficiencias intervencionistas a la hora de fomentar el crecimiento económico y adopte la forma de redistribución institucionalizada. En el nuevo populismo, por tanto, los líderes personalistas y carismáticos serían reemplazados por el Estado de bienestar, más legitimado a la hora de estabilizar, profundizar y prolongar la coacción. Los índices de libertad económica celebrarían la mayor apertura comercial de América Latina, su menor intervencionismo microeconómico, su mayor seguridad jurídica, su menor déficit, su inflación moderada y la ausencia de oscilaciones bruscas en los tipos de cambio. Solo añadirían como nota al pie que, en ese escenario idílico similar al de Europa, la clase media latinoamericana ha terminado pagando unos impuestos también parecidos a los de Europa.

Conclusiones

Hemos visto que el populismo es en esencia antiliberal. También hemos explorado la conjetura de una transformación del populismo, que podría integrarse en una democracia intervencionista estable, algo que desde el punto de vista liberal representaría un paso atrás y una consolidación de la coacción.

Pensemos, por ejemplo, en que el abandono de las nacionalizaciones masivas o los controles de precios exhaustivos en el marco de una

expansión del Estado sería peor para los valores liberales por la máscara que muchos tardarían más en descifrar si la comparamos tanto con el viejo y torpe populismo estatista como con el comunismo completamente expropiador, hoy aún más desacreditado que el populismo clásico. La preocupación por el déficit público puede ocultar un acusado incremento en gastos e impuestos. La economía de mercado, pues, hostigada por el intervencionismo populista tradicional, puede serlo aún más por los sistemas democráticos modernos con un Estado de bienestar consolidado. ¿Qué hacer ante un nuevo escenario que plantea a los valores liberales una amenaza superior a la del viejo populismo?

Se pueden aprovechar las contradicciones del sistema. Si la mutación populista desemboca en una democracia reconocible como tal, entonces no podrá silenciar las voces opositoras con la crueldad ni la eficacia con que lo hizo en el pasado. Si hay posibilidad de crítica, las voces liberales podrán denunciar las pérdidas de libertades con menos riesgos que bajo el populismo clásico. Con ese mayor margen de acción podremos indicar en los países que se mantengan aferrados al populismo más personalista y menos institucional las incompatibilidades entre los mensajes y la política del populismo, su incapacidad a la hora de cumplir sus promesas, los pésimos resultados prácticos de su intervencionismo, su corrupción, su abuso del poder, su clientelismo, su sectarismo, su culto a la personalidad, y las muestras más ridículas y grotescas en las que siempre cae el populismo, sin ignorar su recurso a cierto grado de violencia bajo el amparo de los llamados «movimientos sociales» a los que nunca se puede reprimir –si están a favor del Gobierno o comparten su ideario de forma total o parcial.

En la medida en que la política latinoamericana evolucione hacia la democracia normalizada, los liberales podremos aprovechar para denunciar otras contradicciones: las que padece el Estado de bienestar en las economías más avanzadas. La reciente crisis lo ha debilitado, y sus partidarios alegan que la culpa es de la libertad. En todas las crisis han hecho lo mismo y han pretendido superarlas con aún más impuestos. Sin embargo, como en cada oportunidad, la presión fiscal es más elevada que en los anteriores períodos de turbulencias, y la sostenibilidad del sistema se agrieta por la combinación de costes crecientes y prestaciones limitadas.

Una consideración final: ¿puede el liberalismo ser popular sin ser populista? No se trata, como hemos visto, de que el populismo adopte

algún rasgo liberal —sobre todo en economía—, lo que puede hacer sin que quepa hablar con propiedad de populismo liberal, igual que resulta equívoco hablar de nacionalismo liberal o socialismo liberal al tratarse de teorías, regímenes o estilos políticos de variable oportunismo, pero sistemático anti-individualismo. Dada su tendencia a expandir la coacción política y legislativa, lo mismo valdría para la democracia liberal. Mezclar el liberalismo con cualquiera de los tres conduce a combinaciones vaporosas en donde caben muchas cosas salvo la libertad.

Bryan Caplan opina que el liberalismo popular es posible aunque poco probable; dice que su última muestra fue la revuelta fiscal de finales de los setenta y comienzos de los ochenta, y no le sorprende la anemia ulterior, porque «el hombre de la calle tiene poca simpatía por el liberalismo» (2006). Es concebible que los valores liberales puedan ser defendidos como beneficiosos para el pueblo, y hacerlo con el éxito con que lo han hecho los populistas antiliberales, pero sin mentir. Como es lógico, para lograr este objetivo no hace falta aliarse con el populismo o convertirse en populista, lo que exigiría el sacrificio de los principios, aunque siempre cabe argumentar tristemente que el único líder latinoamericano que no sacrificó sus principios liberales, el escritor Mario Vargas Llosa, perdió las elecciones presidenciales en Perú frente al populista Fujimori (Gallo 1992, 127).

A la hora de las propuestas positivas, el liberalismo popular enfrenta los problemas que detectó Douthat al sospechar de las posibilidades liberales del movimiento Tea Party, en particular el que los políticos que se dicen liberales no cuestionan los llamados derechos sociales (2010, 12). Y Stromberg apuntó que no está claro que pueda existir un populismo inteligente enraizado en la tradición liberal (2010, 7). En efecto, no se ve cómo podría ese populismo inteligente vadear la contradicción que estriba en que el populismo descansa sobre la manipulación de las masas. En cuanto al Tea Party, sus facetas liberales son ciertas, pero la hostilidad al Gobierno no basta para definir el liberalismo, como tampoco basta la reivindicación de menor gasto público o menos impuestos. Populistas, socialistas o nacionalistas, como también conservadores, pueden abogar de modo ocasional u oportunista por ideas liberales -en general, solo económicas- y dejar al margen el individualismo y la tolerancia. En el reino de las terceras vías todo es posible, incluso que los liberales sean cortejados por corrientes de opinión que pretenden que sean cualquier cosa menos lo que son.